

§ 142.— JUSTICIA GRATUITA: CONDENA EN COSTAS AL BENEFICIARIO EN EL RECURSO DE SUPLICACION LABORAL

Fernando Jiménez Sáez de Valluerca c. Grupo Europeo de Recursos Humanos Empresa de Trabajo Temporal S.A.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social).

Sentencia de 27 de octubre de 1997, recurso núm. 4594-1997.

Social: recurso de suplicación (proceso para la tutela de los derechos de libertad sindical).

Magistrado Ponente: Jiménez Sánchez.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

El presente proceso laboral tiene como objeto dilucidar si se ha lesionado el derecho fundamental a la libertad sindical de un trabajador. Tanto en primera instancia como en suplicación se declara que la negativa de la empresa a proporcionar al delegado de una sección sindical una relación de los trabajadores de la misma, no supone vulneración alguna del art. 28 de la Constitución. La cuestión de fondo no presenta dudas interpretativas, pero sí el pronunciamiento acerca de las costas de la suplicación. Dos son fundamentalmente las cuestiones que cabe plantearse respecto de la condena en costas al recurrente: 1) si la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), invocada en la fundamentación de la sentencia, ha introducido alguna modificación en la regulación de las costas del recurso de suplicación laboral; y 2) si el criterio de la temeridad permite obviar la aplicación del art. 233 LPL, norma que determina que en el recurso de suplicación laboral no se impondrán las costas al recurrente que goce del beneficio de justicia gratuita.

Fallo

Se desestima el recurso de suplicación confirmándose la sentencia dictada en primera instancia, y se imponen las costas a la parte recurrente por su actuación temeraria.

Fundamentos de Derecho

Primero: Frente a la sentencia desestimatoria de la demanda promovida dentro del marco procesal de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, se alza la parte actora mediante la formalización de un recurso de aplicación, articulado en dos motivos amparados en el art. 190.c) LPL, en el que se censura a la indicada resolución de instancia la conculcación de los arts. 14 y 28 CE de 27 de diciembre de 1978, siendo impugnado de contrario.

Ha de señalarse en primer lugar, aunque ello no sea transcendente ni determinante de la desestimación del recurso, que el mismo se ampara mal procesalmente, pues, habiéndose producido el total de las actuaciones procesales, demanda incluida, dentro del tiempo de vigencia de la Ley Procesal Laboral de 7 de abril de 1995, el amparo procesal del recurso debía

haberse buscado en el art. 191.c) y no en el 190.c), que es inexistente. Para el caso de que la cita del art. 190.c) fuera correcta en su calidad de amparo procesal de la suplicación, sin duda habría que referirla a la Ley de Procedimiento Laboral de 27 de abril de 1990, en cuyo caso estaríamos ante un recurso amparado en una Ley derogada a partir del día 1 de mayo de 1995.

Dejando aparte la antedicha cuestión procesal, que carece totalmente de relevancia para el éxito o el fracaso del recurso dada su escasa entidad para producir un efecto tan grave como la desestimación del mismo por meros argumentos procesales (serían incompatibles con una aplicación seria del art. 24 constitucional: derecho a la tutela judicial efectiva), ha de concluirse con la adecuada y correcta desestimación que de la demanda verifica la Magistrado de instancia, pues, ni su resolución viola el art. 28 constitucio-

nal, ni conculca el art. 14 del mismo Texto Supremo.

No viola el art. 28 porque la sentencia no desconoce ni el derecho a la libre sindicación, ni el derecho a fundar sindicatos, ni el derecho a afiliarse a ellos, ni el derecho de éstos a conferarse o a fundar o participar en organizaciones internacionales o a afiliarse a las mismas, ni el derecho a no verse compelido a ostentar determinada afiliación, ni el derecho de huelga, ni, en definitiva, ninguno de los derechos que, desarrollados en el nivel de legalidad ordinaria, se incorporan intramuros del amplio elenco que conforma lo que se denomina derecho de libertad sindical.

Y no viola el art. 14 por cuanto la sentencia de instancia no efectúa, respecto de la parte actora, discriminación alguna que venga fundada en hechos objetivos diferenciadores, basados en normas legales, que implican la nece-

sidad razonada y razonable de dar trato distinto a quienes, en definitiva, están incluidos en situaciones bien distintas.

Ha de tenerse en cuenta que estamos a presencia de un trabajador de una empresa que no cuenta con más de 250 trabajadores; de un trabajador que, en su calidad de afiliado al sindicato CNT, insta la formación de una sección sindical, a lo que nada puede oponerse como actividad sindical, pero de lo que nada puede inferirse respecto a la creación de derechos frente a la empresa y de obligaciones de ésta para aquél; de una empresa que cuenta con una representación unitaria al que el actor no pertenece, como no pertenece el sindicato al que él está afiliado; de una representación unitaria a cuyas elecciones tal sindicato, y el actor mismo, ni siquiera se presentaron; de un sindicato, en suma, que carece de presencia alguna en los órganos todos de la representación unitaria ante la empresa.

Por tanto, si bien es factible legalmente la creación de tal sección sindical por parte de CNT y del actor, en tanto afiliado al mismo, y de acuerdo con las previsiones establecidas en el art. 8.1 LOLS de 2 de agosto de 1985, también es cierto que tal central sindical ni tiene la calidad de sindicato «más representativo», ni tiene presencia alguna en los distintos órganos que conforman la representación unitaria de la empresa demandada, por lo que nos es dable que acceda a los derechos que recoge el art. 8.2 de la indicada LO de 1985.

De otro lado, si atendemos a los derechos que derivan del contenido normativo del art. 10.3 de la tan reiterada LO de 1985, nos encontramos con similares valedades legales que impiden el éxito de la demanda, pues, amén de que la empresa demandada no alcanza la cifra mínima de más de 250 trabajadores, se torna al óbice de que la central sindical a la que está afiliado el actor carece de toda presencia, porque voluntariamente ni se presentó a las elecciones sindicales, en los órganos de representación unitaria, tal y como deriva esta exigencia de mínimos de lo que dispone el art. 10.1 de esa LO de 1985. En suma, no

es el actor un delegado sindical «ex art. 10», como habitualmente es llamado este tipo de delegado sindical por la doctrina.

En definitiva, nadie le puede negar al sindicato CNT y, por tanto, al actor, en tanto afiliado del mismo, que cree una sección sindical en la empresa demandada; pero de ello ni el sindicato citado ni el demandante pueden hacer derivar obligaciones para terceros.

Sólo resta añadir dos datos más de interés:

1. El actor, contratado en 24 de octubre de 1996, suscribió un contrato para obra o servicio determinado con duración pactada *ex profeso*, terminando el mismo, sin oposición del aquí actor, el día 14 de marzo de 1997; y

2. Cuatro días antes de la fecha acabada de indicar, el actor formuló la demanda de la que derivan las presentes actuaciones y esta resolución, tramitándose la litis en su totalidad, por tanto, con posterioridad a la finalización pacífica del contrato.

Segundo: 1. En cuanto a las costas, concepto en el que el art. 233.1 LPL mencionada de 1995 incluye los honorarios del letrado de la contraparte, plantea ésta una cuestión a la que ha de contestarse expresamente.

Tal cuestión no es otra que la procedencia de la imposición de costas y, por tanto, de honorarios de letrado a la parte actora.

En principio, visto el art. 233.1 LPL de 1995 citada, no cabe imponer costas a quien, gozando por Ley del beneficio de justicia gratuita, es vencido en el recurso.

Que el actor tiene reconocido por Ley tal beneficio es obvio, por cuanto en su indudable calidad de trabajador está incurso en el art. 2.d) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 10 de enero de 1996, vigente desde el día 12 de julio del mismo año y derogadora de los arts. 25 y 26 del Texto Procesal Laboral tan reiterado de 1995.

Que el actor ha quedado vencido en el recurso es también obvio, como se

infiere de la mera lectura de esta sentencia, en su calidad de resolutoria del mismo.

Por tanto, de una aplicación estricta y solitaria del art. 233.1 procesal laboral sólo cabría deducir la imposibilidad legal de imponer costas y honorarios de letrado al demandante.

2. Pero las cosas no son así de sencillas, pues tal precepto 233.1 procesal laboral no tiene, ni una aplicación tan estricta que no admita excepciones, ni tiene una vida normativa solitaria, ya que, de un lado, cabe apreciar temeridad y/o mala fe, incluso abuso de derecho, y de otro, ha de interpretarse en relación con la normativa referente al beneficio de justicia gratuita, hoy insita en la referenciada Ley de 1996.

Esta Ley de 1996, como ya se ha señalado, declara que tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita los trabajadores intramuros del Orden Social de la Jurisdicción, pero también prevé en su art. 36.2 que la sentencia que ponga fin al proceso condene en costas (que, en lo social, incluyen honorarios de letrado de la contraparte: *vide* art. 233.1 procesal laboral de 1995) a quien tuviere legalmente reconocido ese derecho.

Es decir, de la aplicación conjunta de los indicados preceptos se deduce que cabe la posibilidad legal de imponer costas y honorarios de letrado de la contraparte a un trabajador.

3. Resta por señalar cuándo ello es factible.

Y la respuesta viene dada por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, en su S 15 de noviembre de 1996, dictada en el recurso de casación para la unificación de la doctrina núm. 242/1996, nos informa de que tal imposición es factible realizarse en los casos en los que la parte que goza del beneficio de justicia gratuita actúe de manera temeraria, situación a la que no cabe la más mínima duda de que se pueda sumar la existencia de mala fe o de ejercicio abusivo.

4. En el caso concreto ante el que estamos nos encontramos con una parte actora en la litis, ahora recurrente en

suplicación, que, por el dato objetivo de venir constituida por un trabajador, tiene reconocido el derecho al beneficio de justicia gratuita y que, en el marco del actual litigio, es vencida en fase de recurso.

Sólo si su actuar puede ser calificado de temerario puede imponérsele a tal parte actora las costas y honorarios de letrado de la contraparte.

Y, desde luego, el actuar de la parte actora y ahora recurrente, es evidentemente temerario por las siguientes razones esenciales:

1. La demanda iniciadora de este procedimiento se insta sólo cuatro días antes de que el contrato de trabajo, que finaliza sin oposición del actor, termine.

2. La demanda se basa en la estimada conculcación de derechos fundamentales y/o libertades públicas por parte de la empresa, inacreditándose en absoluto que la empresa vulnera ni uno solo de ellos, ni siquiera por negligencia, imprudencia o descuido.

3. La parte actora no ha realizado actividad probatoria alguna tendente a que, al menos, algún indicio leve o tenue de actividad antisindical o violadora de algún derecho fundamental o de alguna libertad pública pudiera vislumbrarse.

4. El derecho que la parte actora solicitó ejercer ante la parte demandada y, consecuentemente, la obligación que ésta debía cumplir ante la primera es, sencillamente, inexistente de todo punto, ni con la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 en la mano, ni con el Estatuto de los Trabajadores de 24 de marzo de 1995 a la vista, ni con la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 2 de agosto de 1985 aplicada en los términos más laxos.

5. La cuestión que, en definitiva, plantea la parte actora ha sido reiteradamente resuelta, incluso en vía constitucional, en vía casacional unificadora de la doctrina y, en distintas ocasiones, hasta por esta misma Sala y Sección (sirva por todas la S 30 de septiembre de 1997, dictada por estas Sala y Sección en un litigio similar en grado sumo, también promovido por el mismo sindicato y en términos sumamente parecidos, por no decir que, en el fondo, idénticos).

6. Ni uno solo de los requisitos legales, esenciales o accidentales, se da en la presente litis como para poder remotamente dar un punto de apoyo o razón a la parte actora en su tesis; y

7. El recurso de suplicación, además de que más parece formulado por el sindicato (que no ha sido parte en la litis) que por el actor en defensa de sus posibles derechos, se limita a censurar

a la sentencia de instancia, sin atacar en nada los hechos declarados probados (de los que se infiere la imposibilidad legal y material de estimarlo en lo más mínimo), sobre la base de considerar violados los arts. 14 y 28 constitucionales, sin mencionar precepto alguno de legalidad, orgánica u ordinaria, de desarrollo; incluso sin dar siquiera un término de comparación para estudiar la alegación de discriminación.

5. Por tanto (sin que haya lugar a imponer multa por temeridad como pide la parte recurrente, dada la más que dudosa virtualidad del art. 97.3 procesal laboral en esta fase de recurso de suplicación), sí que ha lugar a la petición efectuada por la parte demandada y recurrida en orden a la imposición de costas y honorarios de letrado en su favor y en disfavor de la parte actora, que ha sido vencida en el recurso, que ha obrado con evidente temeridad, y a pesar de que legalmente tiene reconocido el derecho al beneficio de justicia gratuita, por incidir en una excepción del mismo que así lo permite.

6. Consecuentemente, se imponen las costas a la parte actora, con inclusión de los honorarios de la parte demandada, recurrida e impugnante, honorarios que la Sala fija, dadas las ya señaladas circunstancias del caso, en 100.000 pesetas.

COMENTARIO

La presente sentencia, tras desestimar el recurso de suplicación en cuanto al fondo, justifica la imposición de las costas al recurrente vencido en la conducta temeraria del mismo. Tal decisión acerca de las costas no merecería comentario alguno, si no fuera porque el art. 233 LPL determina de manera clara que «la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, *excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita*». Y se da la circunstancia de que el recurrente vencido es un trabajador que tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por declaración legal, en virtud del art. 2 d) de la LAJG 1/1996, en los mismos términos en que se reconocía antes en el art. 25 de la LPL.

La presente sentencia no puede calificarse estrictamente de innovadora, pues sigue la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo —fundamentalmente a partir del año 1993—, conforme a la cual no procede la imposición de costas a los beneficiarios de la justicia gratuita en «situaciones de normalidad procesal», pero sí cuando se aprecie mala fe o notoria temeridad en la conducta procesal del recurrente (así, entre otras las SSTs de 15 de febrero de 1993, 1 de julio de 1993, 25 de septiembre de 1993, 14 de octubre de 1993, 26 de octubre de 1993, 29 de noviembre de 1993, 9 de diciembre de 1993, 5 de mayo de 1995 y 17 de mayo de 1995).

La novedad que introduce la presente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid radica en que se trata de una de las primeras sentencias que fundamenta su fallo en la nueva regulación de la jus-

ticia gratuita, en concreto en el art. 36.2 LAJG y una de las pocas en que el condenado en costas es un trabajador (la jurisprudencia del Tribunal Supremo se refiere de manera prácticamente exclusiva a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social).

Antes de ahondar en los argumentos de la sentencia, procede preguntarse si el contenido del art. 233 LPL se ha visto afectado por la nueva LAJG 1/1996, pues en ella se regula expresamente el régimen de costas respecto del beneficiario de la justicia gratuita.

Si bien ha de admitirse que la LAJG es de aplicación en todo tipo de procesos judiciales y que, además, es *lex posterior* respecto de la Ley de Procedimiento Laboral, ha de sostenerse que el art. 233 LPL no ha sido derogado por la LAJG. Los argumentos a favor de su mantenimiento pueden resumirse así: 1) en la disposición derogatoria única de la LAJG, no se hace referencia expresa al art. 233 LPL; 2) tampoco puede entenderse derogado como consecuencia de la cláusula general derogatoria de la LAJG, pues el contenido del art. 233 LPL no se opone a lo dispuesto acerca de las costas en el art. 36.2 LAJG. Y ello es así porque el art. 36.2 LAJG no regula cuándo han de imponerse las costas, sino que establece cómo habrán de ser abonadas por el beneficiario de la justicia gratuita una vez que haya sido condenado en costas («Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita...»). Así, lo previsto en el art. 36.2 LAJG es de aplicación una vez que se han impuesto las costas al beneficiario de la justicia gratuita, mientras que el art. 233 LPL expresamente excluye tal posibilidad.

Dilucidada esa primera cuestión, resta por analizar los argumentos aducidos para obviar la aplicación del art. 233 LPL en el proceso laboral.

Con anterioridad a la promulgación de la Ley 1/1996, para obviar lo dispuesto en el art. 233 LPL se aducía que las normas de la LEC eran de aplicación supletoria en el proceso laboral. Tal argumento era insostenible pues, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la LPL, esa aplicación supletoria únicamente procede «en lo no previsto en esta Ley», y resulta que el régimen de costas respecto del beneficiario de la justicia gratuita está previsto expresamente en la ley procesal laboral, apartándose en este punto de la regulación procesal civil.

En la presente sentencia, puesto que ya no cabe invocar la aplicación supletoria, se aduce como único argumento que «la aplicación conjunta» del art. 233.1 LPL y el art. 36.2 LAJG, abre la posibilidad de imponer las costas al litigante que tenga reconocido el derecho por declaración legal, en apoyo de lo cual se invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo (en concreto, la STS de 15 de noviembre de 1996).

Pues bien, es cierto que el art. 36.2 LAJG permite imponer las costas al beneficiario de la justicia gratuita, tanto al que obtuvo el reconocimiento específico como al que tenía reconocido tal derecho por declaración legal, al igual que sucedía anteriormente en la LEC (arts. 47 y 48 LEC). Pero ello no significa que lo dispuesto en la LAJG, ni en la LEC (antes), sea de automática aplicación al proceso laboral, y difícilmente puede realizarse una «aplicación conjunta» de dos preceptos que se oponen. Ante esa contradicción debe prevalecer la norma de carácter especial, que sin duda es la contenida en la LPL. En la ley procesal laboral se contempla expresamente el régimen de costas aplicable al beneficiario de la justicia gratuita, precisamente para apartarse de la normativa de la LEC. En la medida en que la nueva LAJG mantiene —aunque con peor redacción— el mismo sistema de costas de la LEC, considero que la aplicación preferente de la normativa laboral debe seguir defendiéndose. En definitiva, el art. 36.2 LAJG sólo será de aplicación al proceso laboral en la medida en que no se oponga a lo dispuesto en la norma especial.

Descartado ese único argumento, sólo queda por analizar la doctrina del Tribunal Supremo que se invoca aplicable al presente caso.

Son numerosas las sentencias en las que el Tribunal Supremo ha impuesto las costas de la suplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, aunque, salvo error mío nunca se ha invocado como fundamento para imponerlas a un trabajador. En ellas la interpretación *contra legem* del art. 233 LPL se justifica —además de en la referida «aplicación conjunta» de la LAJG y la LPL— en una «interpretación armónica y equitativa» de las normas reguladoras de las costas en el proceso laboral. Se aduce, que si en primera instancia cabe sancionar la conducta temeraria del beneficiario de la justicia gratuita —a

través de la multa del art. 97.3 LPL-, no parece coherente que esa misma conducta quede sin sanción en vía de suplicación. De ello se concluye que el criterio de la temeridad puede ser tenido en cuenta para imponer las costas del recurso de suplicación al beneficiario de la justicia gratuita, a pesar y en contra de lo expresamente dispuesto en el art. 233 LPL.

Tal incoherencia, sin embargo, no aparece tan patente cuando el beneficiario de la justicia gratuita es el trabajador. En este punto debe recordarse la especial protección que el ordenamiento procesal laboral confiere a los trabajadores, lo cual determina que, si bien en primera instancia su conducta temeraria puede ser sancionada mediante multa -que casi nunca se impone en la práctica-, tal multa en ningún caso incluirá los honorarios del abogado (a diferencia del empresario, art. 97.3 LPL). De lo anterior cabría deducir que si el legislador exime al trabajador de las costas en primera instancia, incluso en los casos de actuación temeraria, es coherente que mantenga igual exención en vía de suplicación.

Ciertamente, la redacción del art. 233 LPL no puede calificarse de afortunada, pues abre la vía a que los beneficiarios de la justicia gratuita hagan un uso abusivo de los recursos procesales. Esa conducta temeraria, exenta de consecuencias económicas, además de contrariar el fundamento de la justicia gratuita -equilibrar situaciones de desigualdad económica y garantizar el derecho de defensa-, redundará negativamente en el conjunto de la Administración de Justicia, y perjudica directamente a la contraparte, la cual no será reintegrada de los costes asumidos en la defensa frente al recurso de suplicación.

De todo lo anterior ha de concluirse que la presente sentencia -en la misma línea sentada por el Tribunal Supremo- realiza un esfuerzo interpretativo para corregir la deficiente redacción del art. 233 LPL, para que, frente a lo dispuesto en la ley, prevalezcan razones de equidad y de justicia: impedir que las conductas abusivas del litigante que goza de la justicia gratuita queden sin sanción.

Dicho lo anterior, nada cabe objetar a las razones de justicia y equidad que inspiran el presente fallo, pero la solución que se aporta no puede calificarse de correcta desde un punto de vista jurídico, si tenemos en cuenta el limitado papel que nuestro ordenamiento jurídico confiere a la jurisprudencia y a los principios generales del derecho (art.1 CC). El hecho de que la redacción del art. 233 LPL no sea plenamente coherente con la posibilidad de sancionar conductas temerarias en primera instancia, no es motivo suficiente para que los jueces mediante un forzada interpretación *contra legem*, dejen de aplicar la ley. La vía para corregir esa deficiente regulación, en nuestro ordenamiento jurídico, compete al legislador.

Si, además, se tiene presente que la conducta abusiva del recurrente temerario podría haberse sancionado conforme al -poco utilizado- art. 11.2 LOPJ, resulta aún más inaceptable recurrir a un complejo y dudoso esfuerzo interpretativo *contra legem*.

Lorena Bachmaier Winter

§ 143. Ramos Llano. TC 1.ª S 192/1997, de 11 noviembre

§. 143.—PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: EMPLAZAMIENTO PERSONAL DE LOS CODEMANDADOS

Jorge Juan Ramos Llano y otros c. Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria. Tribunal Constitucional (Sala 1.ª).

Sentencia 192/1997, de 11 de noviembre de 1997, recurso núm. 2652-1992, BOE 12.12, 24.

Constitucional: recurso de amparo (contencioso-administrativo: nulidad de licencias de obra).

Magistrado Ponente: Ruiz Vadiño.

Abogados: Rodríguez Viadas y Real del Campo.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Ayuntamiento de Arnauero (Cantabria) concedió el 4 de junio de 1991 licencia de obras a la entidad «Inmobiliaria Arnauero, S.A.», para la construcción de una serie de viviendas en las proximidades de la Playa «La Arena» (viviendas adquiridas por los recurrentes en amparo). La Asociación para la Defensa